

## **AUTO No. 02246**

**“POR LA CUAL SE ACLARA EL AUTO No. 02072 DE 31 DE MAYO DE 2020 “POR EL CUAL SE INICIA UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA OCULAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”**

### **LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

En ejercicio de sus facultades conferidas mediante Resolución No. 1466 de 2018, modificada por la Resolución 2566 de 2018, en concordancia con el Acuerdo 257 del 2006, el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 de 2009, de conformidad con la Ley 99 de 1993 y, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y

## **CONSIDERANDO**

### **I. ANTECEDENTES**

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, de esta Secretaría, expidió el **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**, con radicado interno **2020EE90703** *“POR EL CUAL SE INICIA UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA OCULAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”*

Que una vez revisado el contenido del **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**, se evidenció por parte de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo; que en sus consideraciones y en la parte resolutive de la misma, se fijó de forma inicial como fecha de visita ocular, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015, **el día 24 de junio de 2020 a las a partir de las nueve (09) de la mañana.**

### **II. CONSIDERACIONES JURIDICAS**

#### **1. Fundamentos Constitucionales**

Que la regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia, se estructura a partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los particulares como lo describe el artículo 8° de la Carta Política, el cual señala que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 58 de la Carta Política establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que como tal, le es inherente una función ecológica.

Que así mismo, el artículo 79 de la Carta consagra

### **AUTO No. 02246**

*"(...) Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

*Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (...)"*

Que esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los recursos naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y prevención, se encamina a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su potestad sancionatoria, y exigir a manera de compensación los daños que a éstos se produzcan, tal y como lo establece el artículo 80 Constitucional.

## **2. Fundamentos Legales**

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 establece que

*"Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1'000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación."*

Que adicionalmente, el inciso 2° del artículo 107 de la citada Ley 99 de 1993, señala:

*"ARTÍCULO 107.- (...) Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares".*

Que así las cosas, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) establece los principios a aplicar por parte de la administración, en sus actuaciones que :

### **"Artículo 3°. Principios.**

*(...) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.*

**AUTO No. 02246**

1. *En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.*

(...)

8. *En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.*

(...)

9. *En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.*

(...)

11. *En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.*

(...)

13. *En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. (...)* (Subrayas y negrillas insertadas).

Que en relación a las correcciones y aclaraciones los artículos 41 y 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), señalan:

“(...)

**ARTÍCULO 41. Corrección De Irregularidades En La Actuación Administrativa.** *La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.*

(...)

**AUTO No. 02246**

**Artículo 45. Corrección de errores formales.** *En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”*

Que la corrección material del acto administrativo o rectificación, se da cuando un acto administrativo válido en cuanto a las formas y al procedimiento, competencia, etc., contiene errores materiales de escritura o transcripción, expresión, de hecho, etc., debió expresar algo e inadvertidamente expresó otra cosa; o la voluntad real del agente fue una y la expresión externa de su voluntad consignó sin quererlo otra, por lo cual se puede rectificar y con ello sanear el acto irregular, toda vez que no constituye extinción, ni tampoco modificación sustancial del acto, pues la aclaración supone que el contenido del acto es el mismo y que sólo se subsana un error material deslizado en su emisión.

Que la aclaración prevista en el presente acto administrativo cumple con los presupuestos del artículo citado, por cuanto fue un palpable error de transcripción y no genera modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Que así las cosas, es necesario señalar que la fecha del acto administrativo no varía con la expedición del acto por medio del cual aclara o corrige, en razón a que éste último no incide en el fondo del asunto definido con el acto aclarado o corregido, y por lo tanto, se entiende que la voluntad de la Administración permanece incólume.

Que finalmente, de conformidad con lo señalado en **el artículo 75 de la ley 1437 de 2011** ó Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no procede recurso contra los actos administrativos de ejecución, entre otros, tal como ocurre en el acto que nos ocupa, cuya finalidad es darle alcance y precisar una orden del acto administrativo.

Que por lo anterior, en la presente providencia y en cumplimiento de los principios de celeridad y economía procesal se aclarará el contenido del **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**, donde se indicó que la fecha para la visita ocular sería **el día 24 de junio de 2020 a partir de las nueve (09) de la mañana**, la cual será modificada por razones de publicidad y oponibilidad.

**III.- CONSIDERACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.**

Que una vez efectuada la revisión de los antecedentes que dieron origen al trámite administrativo ambiental presentado por la sociedad **SAN ANGELO S.A.S.**, identificada con **Nit. 800.065.176-9**, se logra verificar que formalmente allegaron la documentación, que dio origen a la actuación

Página 4 de 10

**AUTO No. 02246**

administrativa ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 9, Capítulo 2, Título 3, del Decreto 1076 del 2015, sobre el Procedimiento para otorgar Concesiones.

Que con el fin de resolver de fondo la solicitud de Concesión de Agua, en los términos de la norma actual, es necesario la práctica de la visita ocular, para así continuar con la evaluación y el Acto Administrativo que definirá de fondo dicho trámite.

Que de acuerdo a lo expuesto en los antecedentes, se logra evidenciar que ante las actuales circunstancias, el Acto Administrativo que ordenó la visita ocular, cuenta con un error de hecho, originado en la imposibilidad de practicar la visita, el cual deberá ser subsanado con el fin de continuar con el mencionado trámite permisivo ambiental.

Ahora bien, cuando un acto administrativo de carácter particular y concreto se somete a una aclaración o a una corrección material, el acto que se produce se denominará aclaratorio o “*por el cual se hace una corrección numérica o de hecho*”, respectivamente; sus efectos serán retroactivos y éste último se integra al acto que contiene la decisión de fondo.

Que la Corte Constitucional, en sentencia T 412 de 2017 MP, GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, manifestó en relación al reconocimiento de las correcciones por parte de la administración:

*“(...) De manera que en relación con las irregularidades o defectos de los actos de la administración el ordenamiento prevé diversas herramientas de corrección, en las que el criterio relevante para determinar si la actuación debe estar precedida de la autorización del titular del derecho o de un pronunciamiento judicial sobre la legalidad del acto es la incidencia del defecto, pues los errores relacionados con aspectos meramente formales pueden ser corregidos, de forma oficiosa e incondicional, mientras que aquellos con incidencia sustancial requieren, por regla general, el consentimiento del titular del derecho y ante la ausencia de éste su confrontación judicial. (...)”*

Que, así las cosas, el mencionado yerro con el que cuenta el Auto en cuestión, no se originó en el arbitrio de la administración, sino en la imposibilidad por parte de la misma de ejecutar la visita ocular.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se modificarán para todos los efectos las falencias que se evidencien, a fin de que surtan los efectos que corresponden, teniendo como fundamento lo dispuesto en los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” establece:

**Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa.** *La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluiría.*

*(...)*

**AUTO No. 02246**

**Artículo 45. Corrección de errores formales.** *En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.*

En ese mismo sentido, el tratadista Luis Enrique Berrocal Guerrero, en su libro “Manual del Acto Administrativo” (editorial Librería del Profesional, Bogotá, 2001, Págs. 268 y siguientes) señala:

*“(...) corrección material del acto: Se presenta cuando el acto es modificado por errores materiales en su formación y transcripción, los cuales pueden ser de escritura, de expresión, numéricos, etc., y que no implica extinción ni modificación esencial del acto. (...)”*

Que, por lo anteriormente expuesto, en la presente providencia y en cumplimiento de la celeridad y economía procesal, se realizará el análisis integral de las observaciones jurídicas efectuadas en los citados documentos con el fin de revisar el acto administrativo en su integridad.

Que en el mismo sentido el Tratadista Joaquín Meseguer Yebra, en su libro “La rectificación de los errores materiales, de hecho y aritméticos en los actos administrativos”, manifestó al respecto.

*“(...) El error material no debe producir una alteración fundamental en el sentido del acto, y debe afectar a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa, pues no existe este error cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica. (...)”*

Que en el mismo texto, el Doctor Meseguer Yebra precisó someramente los requisitos que deben estar presentes dentro de la calificación jurídica del error material, en el cual se incurrió en la expedición del acto.

- a) *Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;*
- b) *Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;*
- c) *Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretación de normas jurídicas aplicables;*
- d) ***Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto, pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica;***
- e) *Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no se genere la anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la administración, so pretexto de su potestad rectificadora de oficio, encubrir una auténtica revisión, pues ello entrañaría un fraude de ley, constitutivo de desviación de poder. (...)”* (Subraya y negrita fuera de texto)

Página 6 de 10

**AUTO No. 02246**

Atendiendo lo anterior, se puede establecer que el fin jurídico del acto aquí controvertido es comunicar el inicio de un procedimiento ambiental de Concesión de Aguas Subterráneas, y la práctica de la visita ocular, cuya fijación es de carácter potestativo para la administración. y que la aclaración en la fecha no afecta el acto en sí mismo, en su idoneidad, en su eficacia, y publicidad, ya que, con la modificación realizada, se surtirá el trámite legal, necesario con el cumplimiento de las prerrogativas del derecho al debido proceso.

En el caso sub iudice, encontramos que en el Auto **No. 02072 de 31 de mayo de 2020** y objeto del presente pronunciamiento, se indicó una fecha de visita ocular, que no fue posible ejecutar debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país; error que no afecta o genera un cambio sustancial del Acto Administrativo, ya que la naturaleza jurídica del mismo es de trámite en el cual se manifiesta al solicitante el inicio del trámite ambiental por parte de la autoridad, razón por la cual para el caso en concreto con el fin de subsanar el trámite se fijará como nueva fecha para la visita ocular dispuesta en el Decreto 1076 de 2015, el día **16 de Julio de 2020**, para así darle continuidad; atendiendo lo ordenado en la normatividad mencionada.

Que en cuanto a los autos de trámite o preparatorios, la Corte Constitucional en la sentencia SU2011941. afirmó lo siguiente:

*"(...) 2.3. Los actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos, no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo (...)"*

Que el Consejo de Estado en Sentencia N' 11001-03-25-000-2010-00011 .00(0068-10) del consejo de Estado- sección Segunda, 8 de marzo de 2012, también se ha pronunciado en un sentido similar sobre los actos de trámite y ha señalado:

*"(...) Los actos de trámite, son disposiciones instrumentales que permiten desarrollar en detalle los objetivos de la administración; entonces la existencia de estos actos no se explica por sí sola, sino en la medida en que forman parte de una secuencia o serie de actividades unidas y coherentes con un espectro de más amplio alcance que forma una totalidad como acto. Por el contrario, los actos definitivos ponen fin de manera perentoria a la actuación administrativa, de modo que en ellos se agota la actividad de la administración, o tan sólo queda pendiente la ejecución de lo decidido. (...)"*

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, respecto del trámite de Concesión de Aguas, dispuso en su artículo 2.2.3.2.9.3. que la autoridad ambiental deberá ordenar la práctica de la visita técnica, y para tal fin en cumplimiento a los principios de oponibilidad y publicidad, previó en el artículo 2.2.3.2.9.4. la fijación de un aviso para así comunicar la ejecución de la visita ocular por practicar, y así permitir una adecuada oposición a terceros interesados.

**AUTO No. 02246**

En consecuencia, esta Entidad procederá a aclarar las partes considerativas y resolutivas del **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**, respecto a la nueva fecha de la visita ocular, fijando la misma para el día **16 de Julio de 2020**, a partir de las nueve (09) de la mañana, con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.3 y siguientes del Decreto 1076 de 2015.

La anterior aclaración no afecta el fondo de la decisión del **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020** en ningún sentido ya que el error manifestado no versa sobre el contenido ni la idoneidad del acto administrativo que dio origen a la presente decisión.

**IV. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

Que en relación con la competencia de esta Entidad, es menester indicar que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se dictaron normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, transformó el Departamento Técnico del Medio Ambiente -DAMA- en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que en virtud del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 del mismo año, por medio del cual se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinaron las funciones de sus dependencias y se dictaron otras disposiciones, corresponde a ésta Secretaría ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

Que finalmente, en virtud del artículo tercero, numeral 1, de la Resolución No. 1466 de 24 de mayo de 2018; modificada por la resolución 2566 de 2018, la secretaria Distrital de Ambiente delegó en cabeza de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la Entidad, la función de

*“(...) PARÁGRAFO 1°. Así mismo, se delega la función de resolver los recursos y solicitudes de revocatoria directa, presentados contra los actos administrativos señalados en el artículo tercero, la función de suscribir los actos administrativos mediante los cuales se resuelven desistimientos, modificaciones y aclaraciones; así como de los actos propios de seguimiento y control ambiental de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio y permisivo referidos en el presente artículo. (...)”*

Que en mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO. – ACLARAR** en su totalidad la parte considerativa y resolutive del **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**, por medio del cual la Secretaría Distrital de Ambiente resolvió *“(...) Ordenar la práctica de una visita ocular al inmueble de propiedad de la Sociedad denominada PROPIEDADES EXCLUSIVAS S.C.A identificada con Nit. 8.000.685.385 de la Localidad de Suba del Distrito*

Página **8** de **10**



**AUTO No. 02246**

Capital, en el que se localiza el pozo identificado con el nombre de SAN ANGELO S.A.S con coordenadas X=4°48'1,01" Y= 74°02'41,67" de la ciudad de Bogotá D. C. el día veinticuatro (24) de junio del 2020 a las 9:00 am. (...)" en el entendido que **se fija como nueva fecha** para la realización de la visita ocular el día **16 de Julio de 2020**, Por lo anterior, el artículo segundo, del mencionado Auto quedará así:

*"(...) ARTÍCULO SEGUNDO: - Ordenar la práctica de una visita ocular al inmueble de propiedad de la Sociedad denominada PROPIEDADES EXCLUSIVAS S.C.A identificada con Nit. 8.000.685.385 de la Localidad de Suba del Distrito Capital, en el que se localiza el pozo identificado con el nombre de SAN ANGELO S.A.S con coordenadas X=4°48'1,01" Y= 74°02'41,67" de la ciudad de Bogotá D. C., para el día dieciséis (16) de Julio del 2020, a partir de las nueve (09) de la mañana (...)"*

**ARTICULO SEGUNDO.** - Los demás Artículos, apartes, términos, condiciones y órdenes del **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**, continuarán plenamente vigentes.

**ARTÍCULO TERCERO.** - **Notificar el contenido del presente acto administrativo;** a la sociedad **SAN ANGELO S.A.S** identificada con **Nit. 800.065.176-9**, a través de su representante legal, la señora **MARIA ISABEL ALVAREZ ISAZA** identificada con Cédula de ciudadanía **41.789.762** o quien haga sus veces, y la Sociedad denominada **PROPIEDADES EXCLUSIVAS S.C.A.** identificada con **Nit. 800.068.538-5** a través de su representante legal el **señor HERNAN YEPES VALDERRAMA**, identificado con Cédula de ciudadanía No. **19.298.818** al predio ubicado en la **CALLE 223 No. 53 - 63** de la localidad de suba de Distrito Capital, de conformidad con el Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Comunicar el contenido del presente Auto y enviar el correspondiente AVISO a la Alcaldía Local de Suba de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, atendiendo lo ordenado en el **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**.

**ARTÍCULO QUINTO.** - Comunicar el contenido del presente Auto, al Área Técnica de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de esta Entidad, para que se realice la visita ordenada en el artículo segundo, verificando lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.5 del Decreto 1076 de 2015, que se relaciona en la parte motiva del presente acto administrativo. atendiendo lo ordenado en el **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**.

**ARTÍCULO SEXTO.** - Publicar el presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la Secretaría. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

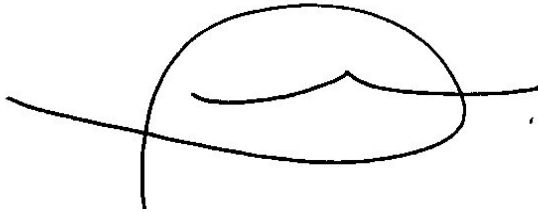
**ARTÍCULO SEPTIMO.** - Fijar dentro de la cartelera que maneja la Entidad, el correspondiente AVISO, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, en concordancia a lo ordenado en el **Auto No. 02072 de 31 de mayo de 2020**.

**AUTO No. 02246**

**ARTÍCULO OCTAVO.** - Contra el presente acto administrativo por ser de trámite, no procede recurso alguno de conformidad con el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011).

**NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,**

**Dado en Bogotá a los 25 días del mes de junio del 2020**



**DIANA ANDREA CABRERA TIBAQUIRA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO**

*Razón Social: SAN ANGELO S.A.S.  
Expediente: SDA-01-CAR-19858  
Predio: Calle 223 No. 53-63.  
Pozo: Pozo Nuevo – Por determinar  
Localidad: Suba  
Proyectó: Laura Catalina Gutiérrez Méndez  
Revisó: Angela Maria Rivera Ledesma*

**Elaboró:**

LAURA CATALINA GUTIERREZ  
MENDEZ

C.C: 1019061107 T.P: N/A

CPS: CONTRATO 20190985 DE 2019 FECHA EJECUCION: 24/06/2020

**Revisó:**

ANGELA MARIA RIVERA LEDESMA

C.C: 1075255576 T.P: N/A

CPS: CONTRATO 20190897 DE 2019 FECHA EJECUCION: 24/06/2020

**Aprobó:****Firmó:**

DIANA ANDREA CABRERA  
TIBAQUIRA

C.C: 40612921 T.P: N/A

CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 25/06/2020